

La presencia de los «Montoneros»

Desde hace un tiempo, en la Argentina actúan varias organizaciones revolucionarias que practican métodos similares de lucha y que genéricamente se denominan como «guerrilla urbana».

Por lo menos seis grupos han firmado comunicados e inscripciones que afirman la comisión de distintos hechos: asaltos a Bancos y organizaciones financieras, atentados de distinto tipo, secuestros, ocupaciones de pueblos o localidades, toma de puestos policiales, etcétera. Si todos los hechos de esta clase ocurridos en los últimos meses pertenecieran a una misma organización estaríamos en presencia de una fuerza poderosa, de una vitalidad comparable quizá a la de los «Tupamaros» uruguayos.

La dispersión de las acciones, la aparición de distintas siglas, da a la acción armada en la Argentina una presencia difusa, aun en aquellos sectores de la opinión pública más informados. «¿Quiénes son?», suele ser la pregunta que sigue a las acciones de los guerrilleros. FAR, FAP, FAL son siglas que aparecen al pie de los comunicados que quedan inscritos en las paredes cercanas a donde se realizan las acciones, pero que no llegan claramente diferenciadas a la opinión pública.

A fines de mayo se produjo la más sensacional de todas estas acciones: el secuestro del teniente general Pedro Eugenio Aramburu y la aparición de una nueva organización que se adjudicaba el hecho: los «Montoneros». Las circunstancias políticas que rodearon el secuestro de Aramburu, concretamente el aprovechamiento que sectores liberales hicieron de éste para precipitar la caída de Onganía, adjudicando a su gobierno la responsabilidad del hecho, sumadas a algunos puntos oscuros y contradictorios, crearon dudas acerca de la existencia de los «Montoneros», y mucho más de sus posturas revolucionarias.

La ejecución de Aramburu aumentó las dudas. Para muchos, los «Montoneros» funcionaban como tapujo de una organización armada, ligada a los organismos de represión; para otros, era una organización independiente, pero inspirada por aquéllos. Los «Montoneros» no se esforzaron mucho por disipar esa imagen. Sus comunicados en torno al hecho exaltaban un revanchismo peronista y sólo se quedaban en eso. La toma posterior del pueblo de La Calera, en la provincia de Córdoba, marcó una nueva presencia de esta organización. A la vez, abrió el cauce a una investigación policial que terminó con la identificación de los autores del secuestro y ejecución de Aramburu. Varios nombres comenzaron a tener difusión popular: Carlos Maguid, Emilio Maza, muerto en Córdoba en un choque con la Policía; la esposa de Maguid, de apellido Arróstito, fueron detenidos. Otros figuraron como prófugos: Abal Medina, Gustavo Ramus, Capuano Martínez, Norma Arróstito (hermana de la anterior) y Mario Firmenich.

Mientras el proceso sobre el caso Aramburu entraba en los vericuetos de la burocracia judicial, y en torno a él se tendía un cerco de mutismo, se tuvo la creencia de que los «Montoneros» estaban acabados. Pero el 27 de agosto, un nuevo hecho sacudió a la opinión pública: la muerte a balazos en plena calle del dirigente gremial peronista, de tendencia dialoguista, José Alonso. Pocas horas después, un comunicado, firmado por los «Montoneros», se adjudicaba la acción y la explicaba; comenzaba a cumplirse la advertencia que la agrupación hizo una vez de que serían abatidos todos los traidores a la clase obrera y al movimiento peronista.

La duda cayó también sobre este hecho. Diez días después, los «Montoneros» aparecían nuevamente. Un grupo de ellos se enfrentó a tiros con una patrulla policial a pocos kilómetros de Buenos Aires, y dos cadáveres quedaron en el lugar: los de Abal Medina y Gustavo Ramus. Otras dos personas lograron huir y la Policía se lanzó a una caza pocas veces vista, sin resultado hasta el momento de escribir esta crónica.

El hecho creó una mezcla de asombro e incertidumbre. Muchos no querían creer que Abal Medina y Ramus pudieran estar en acción: a la vista de cualquiera, sus nombres y sus fotografías circulan desde hace meses por todas partes. A los pocos días los «Montoneros» aclararon todas las dudas: hicieron llegar a algunos diarios objetos pertenecientes a José Alonso y, simultáneamente, admitieron ser autores de la muerte de Medina y Ramus.

Los «Montoneros», ya no cabe duda, son los autores de las dos acciones más espectaculares que se hayan llevado a cabo en la Argentina en muchos años: las ejecuciones de Aramburu y Alonso. Nada han dicho aún si también tuvieron que ver con la ejecución de Augusto Vandor, ocurrida en 1969. De cualquier manera es hoy la organización más significativa de la Argentina.

Difícil es establecer cuáles son los objetivos políticos de los «Montoneros», porque no los han explicado a aquellas figuras que se presentan como carta de conciliación del régimen (Aramburu y Alonso; quizá Vandor) y, a la vez, revivir el enfrentamiento peronismo-antiperonismo, que fue muy agudo hasta el año 1960, pero que el tiempo tiende a diluir. Difícil es también saber si después de los últimos hechos la organización tiene reservas para seguir actuando, o si el núcleo de la misma está formado por los nombres conocidos de una lista que incluye a muertos, detenidos y prófugos.

La opinión pública, eso sí, ha colocado el nombre de los «Montoneros» en el primer lugar de las organizaciones armadas. Los sectores izquierdistas, aquellos que apoyan (sin participar) la lucha armada, los miran con respeto, pero con alguna desconfianza. Los métodos son discutidos, aunque nadie niega su valentía y sus objetivos revolucionarios. El pasado político de la mayoría de los «Montoneros» conocidos —el catolicismo de derecha— es un escollo también. Pero no hacen profesión de fe católica: sólo se manifiestan peronistas.

Todos estos datos se proyectarán sobre el futuro con su secuela de interrogantes. A éstos responderán los

«Montoneros» con sus futuras acciones. Hoy su presencia en el panorama argentino es incuestionable ■ JULIO MORANDI (P. L.).

DEPORTE Y POLITICA

Las medallas y Samaranch

En la piscina olímpica Bernardo Picornell se han desarrollado los hasta ahora considerados como Campeonatos de Europa de Natación y Saltos más brillantes de la Historia. Records del mundo, de Europa y records nacionales. España ha conseguido resultados importantes, en relación al nivel general deportivo. Esteve, dos medallas de plata y dos de bronce, y Chicoy, Lang-Lenton, Corell y María Paz Corominas han llegado a pruebas finales individuales. El tema público durante los Campeonatos ha sido la brillantez deportiva de los mismos, pero también la brusca sustitución de Juan Antonio Samaranch al frente de la Delegación Nacional de Deportes.

Toda clase de motivos. Pero el más en boca de las gentes habitualmente informadas es la excesiva independencia que la Delegación había adquirido en relación con la Secretaría General del Movimiento. El relevo de hombres parece abonar esta tesis. Gich Bech de Careda pertenece a un grupo de políticos jóvenes (en el que se integran desde Torcuato Fernández Miranda hasta Fraga Iribarne o Villar Palasi), compañeros de estudios en el Colegio Mayor madrileño que más políticos ha dado al país desde los tiempos de la Institución Libre de Enseñanza. Gich ya fue hombre de confianza de Fernández Miranda en su etapa de director general de Enseñanza Universitaria. A deducir del discurso de presentación de Fernández Miranda, Gich trabajará en la sombra y Fernández Miranda dará la cara responsable del deporte español. Nadie sabe si se trata de una politización del deporte o de una deportivización de la Secretaría General del Movimiento.

Samaranch ha hecho una salida igualmente ambigua. ¿Hay que calificarla de deportiva o de política? Es decir, si su amabilidad de perdedor es deportiva o es política, porque, más tarde o más temprano, volverá a la rueda de los cargos públicos, más de una vez se ha hablado de Samaranch como futuro alcalde de Barcelona, y con más motivo ahora que el señor Luis Miravittles (el científico de la televisión), al frente de los destinos del «public relations» municipal, se ha inventado «logans» turísticos como Barcelona, capital del deporte español o el imaginativo Barcelona, 2.000 años de cultura y deporte.

De momento, el nombramiento de Gich ha molestado mucho más a Santiago Bernabéu que a Samaranch. El señor Bernabéu opina que un ex gerente del Barça no puede ser imparcial al frente de los destinos del deporte patrio. Igual suspicacia podría suscitar la repetida presencia de ministros y directores generales en el palco del Real Madrid (entre ellos, don

Torcuato Fernández Miranda). No tardará Gich en tranquilizar a la hinchada madridista. El señor Gich habla seis idiomas (catalán, español, italiano, inglés, francés y alemán) y no carece, pues, de instrumental lingüístico para convencer sobre la honestidad de su gestión. Además, es crítico de Arte, y tiene, pues, ideas muy claras sobre la proporción, la medida y la armonía.

Mientras tanto, el público ha descubierto un nuevo deporte gracias a televisión: la natación. Semanas atrás, Esteve fue silbado en Zaragoza porque no batía records. El padre de Esteve se encoró con un espectador y le recriminó que se comportara como en un partido de fútbol. El espectador contestó:

—Yo he pagado para ver batir records.

Esta futbolización de la natación, esta politización del deporte, esta deportivización de la política, abonan el profundo desconcierto semántico del país. Lo que aparece como muy claro es que Esteve ha llegado como enviado por el cielo; en plena decadencia Manolo Santana, urgía un nuevo supermán nacional de repuesto, descartado ya Urtain para tan importante puesto político-deportivo. ■ M. V. M.

EL CASO NIARCHOS

El armador, inocente

Los tribunales de El Pireo acaban de emitir su veredicto sobre la supuesta culpabilidad del armador griego Stavros Niarchos (véase el número 433 de TRIUNFO) respecto de la muerte de su esposa, Eugenia. Y la decisión judicial es la de que «no hay lugar» para sostener la acusación de que Stavros hubiera inferido a Eugenia «golpes mortales», en la noche del 4 del pasado mes de mayo.

Contra las apreciaciones del fiscal Fafoutis, según las cuales los hematomas que el cuerpo de la infortunada presentaba tuvieron más participación que los barbitúricos en la muerte de la señora Niarchos, las autoridades griegas estiman que la isla de Spetsopoula fue escenario de un vulgar suicidio, sin más complicaciones.

El lector que haya seguido con interés el apasionante episodio posee, a partir de esta decisión definitiva, un elemento más de juicio. Pero ya el «affaire» se archiva.

ARQUITECTURA

Proceso a la construcción

La tragedia de Almería trae de forma trágica a la actualidad un hecho que transforma en accidente lo que subyace como cotidianidad en ese negocio negro que se conoce con el

nombre de construcción. Sobre la patología descarnada de la ciudad capitalista, que nos va formulando a diario sus dosis de estupefacientes consumistas y nos hacen ver casi como necesario del bien urbano la agresividad del medio, los problemas del tráfico, la polución, la promiscuidad habitacional, que a niveles más ilustrados nos completan con estudios y datos operativos, que nos reseñan como factores inherentes al desarrollo urbano, la asignación del suelo en estado bruto, la angustia urbana, la esclerótica de la interacción social.

La planificación, extraña y abstracta adreivación, «se aviene con el pensamiento de que en ciertos terrenos circunscritos rija el principio de la competencia, de la lucha, de la libre formación», y sobre este panorama adulador en justificaciones medra el interés más desmesurado y el pragmatismo más oportunista. Los vientos proféticos de los tecnócratas parecen paliar con sus técnicas agresivas unos defectos heredados del viejo sistema, estructurado por un capital liberal y en una técnica artesanal, pero en el fondo no son más que cortinas de humo de los ideólogos del cambio frente a las demandas de una realidad que reclama valor de uso.

La construcción en nuestro país no dispone de unos mecanismos reguladores que permitan un control coherente y preciso a sus márgenes de abuso. Sobre las asignaciones del suelo bruto sigue la ocupación del terreno como valor de mercancía; según que la acción del capital sea liberal, monopolístico o accionario, ninguna regulación ni control posterior rige los procesos constructivos. El promotor dirige, controla y regula todos los mecanismos que entran dentro del proceso. El proyecto técnico, en función de su planificación económica; los materiales, en orden a su valor de mercancía (la construcción en función del mercado es un dato recogido a diario en la prensa inmobiliaria). El uso del subsuelo (siempre que no existan ordenanzas reguladoras en cuanto a volumen a ocupar). Los procesos constructivos. Los tiempos de construcción. Los valores de mercado y los procesos de venta.

La empresa constructora puede ser constituida sin más garantía que las cotizaciones sociales de sus empleados. En el vasto panorama de nuestro desarrollo inmobiliario existen los ejemplos suficientes, donde el fraude, la incompetencia, el abuso y la ignorancia han levantado el suburbio habitacional en altura más lamentable de nuestra historia. La falta de control de regulación de unas ordenanzas que estructuren la empresa, con una tipología más industrial y una responsabilidad técnica controlada, hacen de la construcción un campo abonado para la improvisación, el abuso y el negocio más lucrativo del país. Con una mano de obra no instrumentalizada, con unos bajos niveles de adiestramiento, enclavados en la demografía del paro, sin una estructuración cualificada y, por supuesto, sin unos tiempos de aprendizaje, pasan de las estructuras agrarias más elementales al uso y la responsabilidad de las faenas de mayor responsabilidad, como son los trabajos de estructura, fábricas de comportamiento mecánico, remodelación de infraestructuras, etcétera. El peonaje en la construcción es el proletariado más marginado, con un salario mínimo y con una eventual-



La reciente tragedia de Almería, al igual que la ya olvidada de Los Angeles de San Rafael, vienen a poner en cuestión todo el proceso de la construcción.

lidad laboral verdaderamente dramática, sin opciones a adiestramientos progresivos y con una incultura secular. Este proletariado marginado debe adaptarse a la gran instrumentalización técnica de la empresa por procesos intuitivos, por aproximaciones no controladas, por errores no verificados, creando en la base del proceso constructivo unas fuerzas que deterioran la calidad y ejecución de la obra.

La falta de verificación y experimentación de la obra realizada impide la verificación científica que lleva implícito todo proceso empírico, y la construcción, teórica y metodológicamente, es un proceso empírico. La racionalidad industrial, con todos los inconvenientes que en otros planos comporta, no ha tenido acceso a la industria de la construcción, que permanece como estructura casi artesanal en los procesos de explotación de la mano de obra no cualificada, sirviéndose de la herramienta industrial para abordar los procesos macroconstructivos dentro de lo que se podría denominar la racionalidad de organización, formulando así una contradicción bastante elocuente de medios y métodos contradictorios y antagónicos, creando así una racionalización parcial, una auténtica racionalidad de estrategia que facilite su determinismo final, la obra construida como mercancía.

En la plataforma de los técnicos al servicio de la empresa, ya sea ésta de una actividad privada (el trabajo liberal de algunos arquitectos e ingenieros, aparejadores o peritos), que aún se ejerce, o el trabajo controlado en la «gran empresa», su capacidad teórica y práctica está controlada por las minorías que poseen el poder de la empresa y que no ignoran que el precio de un profesional titulado debe ser cotizado con mayores márgenes que un peonaje no cualificado. Este primer eslabón de cotización desmesurada (existen márgenes de sueldos

doscientas veces mayor entre un profesional titulado y un peón de la construcción) crea unas distorsiones ético-sociológicas fáciles de comprobar. La acción científica, teórica o práctica, se encuentra vulnerada por el salario administrado, el trabajo del técnico, o se instala en las minorías rectoras de la empresa, o entra dentro del juego de la racionalidad de organización, dentro de unas leyes que no tienen opción dialéctica, de unos programas cualitativa y cuantitativamente establecidos, donde una acción teórica o una experimentación práctica no tendrán viabilidad; su trabajo se compra con un precio más alto, pero para un fin ya establecido.

Los índices de cotización que revierten sobre el profesional titulado no obedecen a leyes de altruismo tecnocrático, son estipulados para afrontar el riesgo y la catástrofe. La responsabilidad social y la moral paternalista del promotor o de las minorías rectoras de la empresa necesitan fijar una víctima responsable, y su ética social queda garantizada con la instrucción correspondiente. A nadie se le oculta la degradación a que han llegado determinadas profesiones relacionadas con el mundo de la construcción, degradación y envilecimiento en algunas ocasiones escandalosos, pero es un juego excesivamente provocador relegar la responsabilidad social de un acontecer perfectamente organizado para el lucro en la firma de un profesional, aunque en algunas ocasiones (y no es precisamente el caso del siniestro de Almería) estos profesionales sean cómplices de su incapacidad, incompetencia, irresponsabilidad profesional o su ambición desmedida.

Resulta verdaderamente irónico, si no fuera por la tragedia que lleva implícito, el contemplar y leer las notas de prensa de unas actividades y competencias profesionales que derrochan retórica en justipreciar sus privilegios

o sus demandas de participación, mientras la realidad arquitectónica, el control constructivo, la calidad de obra, la imagen realizada, ofrece un panorama tan desolador y desencantado como el que tenemos que compartir.

La intervención masiva de unos intereses está marcando una patología lo suficientemente aguda como para iniciar un proceso a la construcción en nuestro país, para aclarar unas fórmulas muy oscuras y equivocadas, para regular desde la Administración, con una legislación coherente, un campo lleno de irresponsabilidades sociales, cívicas y de riesgo personal. La mecánica sensacionalista de ciertos medios de comunicación pone su acento en el dramatismo sensiblero de los hechos luctuosos, de los responsables que siempre se encuentran para justificar y llenar el turno de la noticia, pero debajo de estos siniestros, lamentables por todos los conceptos, permanece una superestructura de intereses que es necesario definir y diagnosticar.

Una división del trabajo y responsabilidades en los técnicos responsables; la presencia de titulados a ple de obra, que garantice un control de calidad de la misma; unas ordenanzas reguladoras del subsuelo en uso y ocupación; unos controles regulados de las condiciones mecánicas del suelo; comprobaciones periódicas de los procesos constructivos mediante ensayo en laboratorios estatales o privados; un aprendizaje forzoso, mediante cursillos de capacitación, para el obrero no cualificado, y, sobre todo, una legislación que estructure la empresa constructora, son cuestiones de urgencia que tendrá que abordar la Administración si no desea que los hechos de Almería o los que parecen ya olvidados de Los Angeles de San Rafael sean el comienzo de una serie de hechos totalmente inadmisibles. ■

ANTONIO F. ALBA.